Convenio Solidario 080-2026

ANEXO 2 — ANÁLISIS DEL SECTOR

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

El desarrollo del presente análisis se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, especialmente en los principios de participación ciudadana, solidaridad y función social del Estado. De igual manera, se apoya en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que regulan la contratación estatal, así como en el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la elaboración de estudios y documentos previos.

De manera particular, resulta aplicable la Ley 2166 de 2021, cuyo artículo 95 autoriza expresamente a las entidades estatales para celebrar convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal, hasta por la menor cuantía, para la ejecución de obras que beneficien directamente a las comunidades. Este marco normativo habilita una modalidad contractual que prioriza la participación comunitaria, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el fortalecimiento del tejido social.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS, CON LA FEDERACIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CUBIERTAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 116 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL HUILA “IDACOHUILA”

2. ANÁLISIS DEL SECTOR

El presente análisis de sector se centra en el mejoramiento locativo de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales del Departamento del Huila, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 116 de 2025, suscrito entre la Gobernación del Huila y el Instituto Departamental de Acción Comunal del Huila (IDACOHUILA). Este convenio tiene como finalidad aunar esfuerzos técnicos, administrativos, presupuestales y financieros con Organismos de Acción Comunal (OAC) para garantizar intervenciones sostenibles, eficientes y socialmente inclusivas en la infraestructura educativa.

El mejoramiento de la infraestructura escolar no se limita a la construcción o reparación de aulas y espacios físicos; constituye un componente esencial para fortalecer la educación, la equidad social y el desarrollo comunitario. La modalidad de convenios solidarios con OAC permite ejecutar obras de impacto social con participación activa de la comunidad, reduciendo costos, optimizando recursos y asegurando la sostenibilidad de las intervenciones

a. Mantenimiento de sedes educativas como obra civil

El mantenimiento locativo de sedes educativas comparte características con las obras civiles tradicionales. Las intervenciones técnicas incluyen la reparación y remodelación de aulas y zonas administrativas, la adecuación de baterías sanitarias y comedores escolares, el mantenimiento de cubiertas, pisos, pintura y carpintería, así como la instalación o mejora de

espacios recreativos y deportivos. Cada actividad requiere planificación, contratación de mano de obra, provisión de materiales y supervisión técnica para garantizar durabilidad, seguridad y funcionalidad. La participación de los OAC asegura un control cercano, ejecución eficiente y uso responsable de los recursos

b. *PERSPECTIVA COMERCIAL: PIB desde el enfoque de la producción – Tercer Trimestre 2025*

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia mostró durante el tercer trimestre de 2025 un crecimiento de 3,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las cifras publicadas por el DANE en su serie original. Este resultado refleja un entorno económico dinámico, caracterizado por una recuperación sostenida de la producción en varios sectores estratégicos, así como por un comportamiento positivo del consumo interno y de la inversión, tanto pública como privada. La aceleración observada en este trimestre es particularmente relevante, considerando que durante el primer y segundo trimestre del año el crecimiento fue de 2,7 % y 2,1 %, respectivamente, lo que evidencia un incremento progresivo de la actividad económica a lo largo del año.

El análisis sectorial revela que las actividades que más contribuyen al crecimiento del PIB durante este trimestre son aquellas vinculadas directamente a los servicios públicos, la administración y el consumo, así como sectores estratégicos para la infraestructura y el desarrollo productivo del país. Entre ellas destacan:

Administración pública, defensa, educación y servicios de salud, que crecieron 8,0 %, contribuyendo con 1,3 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB. Este resultado refleja la inversión sostenida en servicios sociales y públicos, así como un efecto positivo de los programas de gasto público en la economía. La expansión de este sector tiene un impacto directo sobre la demanda de servicios auxiliares, incluidos los trabajos de mantenimiento, infraestructura y soporte logístico, que resultan esenciales para convenios como el de mantenimiento vial tipo “Rosería”.

Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, que crecieron 5,6 %, aportando 1,2 puntos porcentuales al PIB. Este conjunto de actividades evidencia una recuperación de la demanda interna, dinamizando la circulación de bienes y personas, lo que a su vez se traduce en una mayor necesidad de infraestructura vial eficiente y en condiciones óptimas, dado que carreteras, vías secundarias y accesos rurales son esenciales para mantener la conectividad y la cadena de suministros.

Industrias manufactureras, que mostraron un crecimiento de 4,1 %, contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales. Este sector refleja la capacidad de transformación de bienes y materias primas en productos terminados, incluyendo insumos para la construcción y mantenimiento, maquinaria y equipos. Su desempeño es particularmente relevante para el mantenimiento vial, pues asegura la disponibilidad de materiales y tecnología para la ejecución de obras civiles y tareas operativas en carreteras y caminos rurales.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un crecimiento de 2,4 %, aportando 0,5 puntos porcentuales al PIB. Este sector, fundamental para la economía rural, genera una demanda constante de servicios de riego, mantenimiento de vías de acceso a zonas productivas y soporte logístico. La expansión moderada pero sostenida de este sector subraya la necesidad de que los contratos de mantenimiento vial contemplen las particularidades de las zonas rurales, especialmente para garantizar el tránsito seguro de insumos agrícolas y maquinaria pesada.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Tercer trimestre 2025[pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025[pr]-III / 2024[pr]-III	2025[pr]/ 2024[pr]	2025[pr]-III / 2025[pr]-II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,4	4,1	1,0
Explotación de minas y canteras	-5,7	-7,2	0,8
Industrias manufactureras	4,1	2,1	1,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	2,3	0,7	0,7
Construcción	-1,5	-2,7	1,1
Comercio al por mayor y al por menor[3]	5,6	5,1	0,2
Información y comunicaciones	1,9	1,8	0,4
Actividades financieras y de seguros	4,3	3,5	2,3
Actividades inmobiliarias	2,1	2,0	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	1,1	1,3	-0,1
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	8,0	4,4	3,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	5,7	9,4	1,0
Valor agregado bruto	**3,6**	**2,8**	**1,3**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,7	2,5	0,9
Producto Interno Bruto	**3,6**	**2,8**	**1,2**

Fuente: DANE, PIB_T

i. Dinámica trimestral y tendencias

Cuando se analiza el PIB en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, se observa que el crecimiento respecto al trimestre inmediatamente anterior fue de 0,5 %, indicando que, además del crecimiento anual, la economía mantuvo un comportamiento estable y positivo frente a la variación estacional. La recuperación del tercer trimestre refleja una combinación de

factores internos y externos, incluyendo el repunte de la inversión pública, la recuperación de la demanda interna y la estabilización de precios de insumos estratégicos para la construcción y producción.

En este contexto, los sectores que lideran la contribución al crecimiento económico no solo reflejan la capacidad de producción, sino que también impactan directamente la planificación de proyectos de infraestructura, mantenimiento vial y servicios de riego. Por ejemplo, la expansión de administración pública y educación implica obras de mantenimiento en instituciones y caminos de acceso, mientras que el dinamismo del sector comercio y transporte aumenta la presión sobre la red vial para asegurar movilidad eficiente y segura.

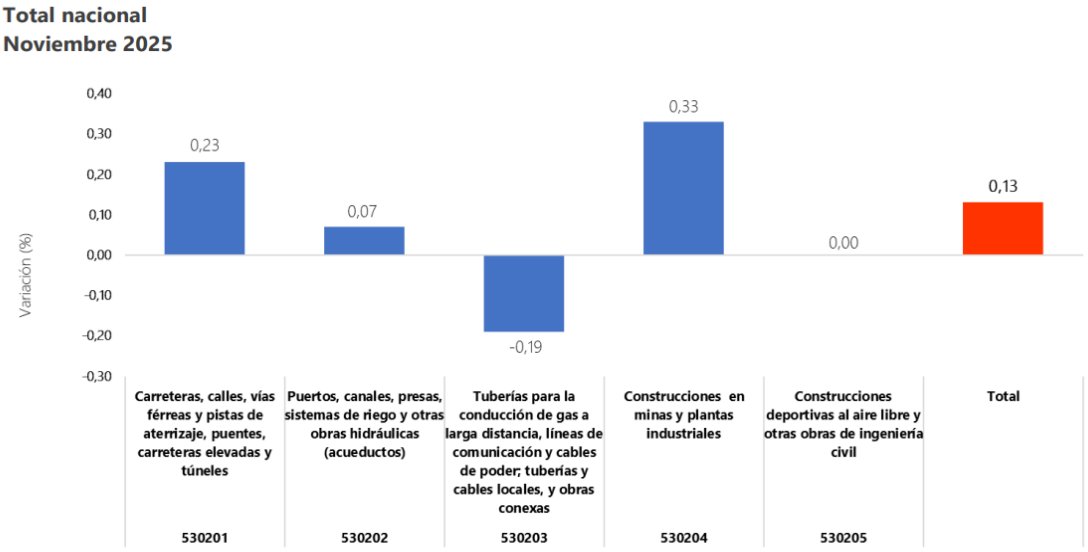
c. Costos de construcción y presión por mano de obra

Una de las variables más relevantes para la ejecución de obras civiles es el costo de producción. Datos recientes muestran que el Índice de Costos de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) ha tenido variaciones positivas, impulsadas principalmente por la mano de obra:

- En marzo de 2025, la variación anual del ICOCIV fue aproximadamente 3,94 %.

Esto refleja presiones crecientes sobre los costos de ejecución, que también se sienten en el mantenimiento vial. Estos costos deben considerarse al formular presupuestos y cronogramas, y fortalecen la necesidad de planes técnicos sólidos y participación comunitaria para garantizar eficiencia en la ejecución.

Evolución del Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV)



Fuente: DANE, ICOCIV.

d. Comportamiento del sector construcción y proyecciones

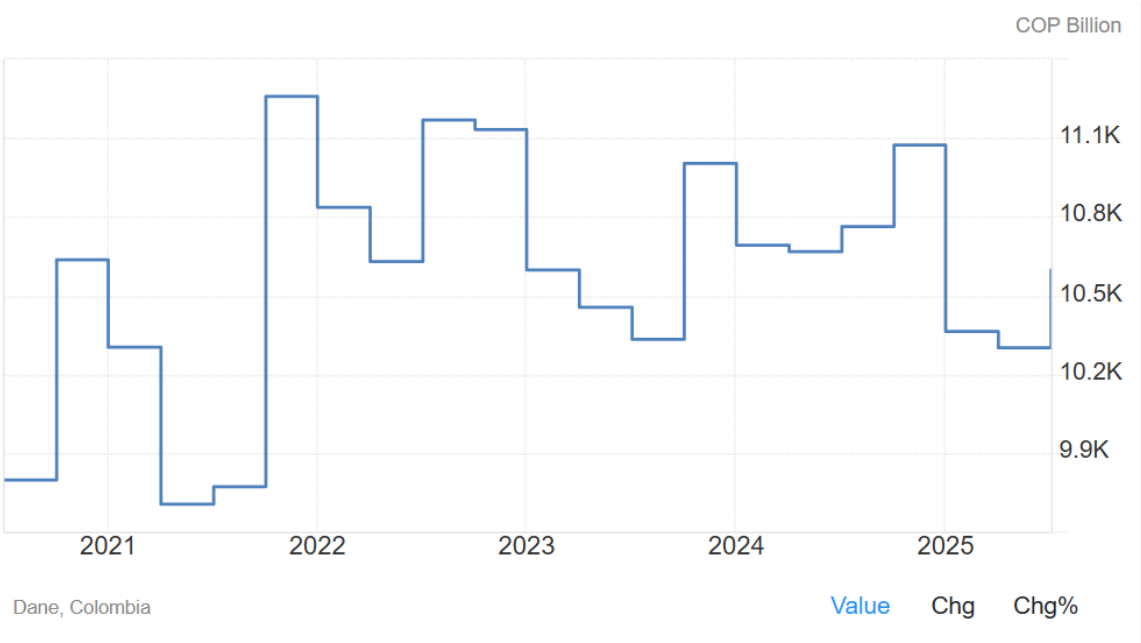
Los indicadores macroeconómicos nacionales ofrecen contexto al comportamiento del sector construcción, que incluye las obras civiles y su mantenimiento:

- La variación anual del PIB general en diciembre de 2025 fue aproximadamente 5,10 %.

- El Banco de la República proyecta que la inflación siga descendiendo hacia la meta del 3 % para finales de 2026, con una inflación estimada alrededor de 3,6 % a diciembre de 2026.
- Modelos econométricos proyectan que el PIB del sector construcción en Colombia podría rondar los 11,725 mil millones de COP en 2026, tras estimarse cerca de 11,372 mil millones de COP en 2025.
-

A pesar de estas proyecciones globales positivas, informes de indicadores trimestrales señalan que el sector construcción ha experimentado periodos de contracción, con caídas interanuales de su valor agregado en algunos trimestres de 2025.
Este contraste evidencia que la recuperación del sector no es homogénea, y que subsectores como el de infraestructura rural requieren enfoques diferenciados de inversión y ejecución.

PIB del sector construcción 2021–2026 (estimado))



e. *Cadena productiva del sector construcción: enfoque en infraestructura educativa*

El mantenimiento locativo de sedes educativas se desarrolla dentro de una cadena productiva estructurada, similar a las obras civiles:
Materias primas: Los proyectos dependen de insumos básicos como cemento, gravas, pintura, madera, mobiliario y tuberías. La disponibilidad local permite que la ejecución sea más ágil, reduce costos de transporte y potencia la economía regional.
Transformación y servicios intermedios: La etapa de transformación incluye carpintería, plomería, electricidad, albañilería, pintura y servicios de supervisión técnica. La intervención de OAC facilita la logística, la contratación de mano de obra local y la coordinación con proveedores, garantizando eficiencia y calidad.

Materiales finales y ejecución de obra: En esta fase, los insumos se convierten en aulas habilitadas, baterías sanitarias operativas, comedores funcionales y espacios recreativos seguros. La supervisión continua por parte de OAC asegura la correcta ejecución y durabilidad de las obras.

f. *Costos y presiones económicas*

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), publicado por el DANE, evidencia que los costos asociados a materiales y mano de obra en infraestructura vial han venido aumentando de manera sostenida en 2025. En noviembre de 2025, los costos de carreteras, calles y puentes registraron una variación mensual positiva de 0,23 %, superior al promedio general del índice (0,13 %). Esto refleja presiones inflacionarias específicas en los insumos y equipos más vinculados a mantenimiento vial, un aspecto clave para planificar presupuestos y cronogramas de obra.

Con el fin de reducir el impacto de la presión inflacionaria e importante integrar proveedores locales y comunidades para amortiguar incrementos y optimizar la cadena logística. Por ejemplo, disponer de agregados cercanos a los puntos de obra reduce la dependencia de transporte de larga distancia y los costos asociados al combustible y logística.

El sector de infraestructura educativa enfrenta presiones similares a las del sector construcción en general: incremento en costos de materiales y mano de obra, necesidad de presupuestos sólidos que incluyan transporte, logística y supervisión técnica, y planificación eficiente para evitar sobrecostos y retrasos. La integración de OAC permite optimizar recursos al contratar mano de obra local, aprovechar proveedores cercanos y mejorar la supervisión de los trabajos

g. *Impacto social y comunitario del mantenimiento de infraestructura educativa*

El impacto social de las intervenciones locativas es amplio y profundo. En la escala social y comunitaria, se destacan los siguientes beneficios:

- Mejora en el aprendizaje y asistencia escolar, al contar con aulas seguras y adecuadas.
- Generación de empleo local, incluyendo jóvenes y mujeres, en actividades de construcción y mantenimiento.
- Participación activa de la comunidad, mediante la identificación de prioridades, supervisión de obras y organización de cuadrillas.
- Fortalecimiento del capital social, reduciendo riesgos de deterioro prematuro y aumentando la apropiación de los proyectos.

Los convenios solidarios en Huila han demostrado ser efectivos para ejecutar obras con impacto comunitario. En 2025, el IDACOHUILA lideró la firma de 50 convenios solidarios, beneficiando a más de 50 sedes educativas en 22 municipios, con una inversión superior a $2.303 millones COP. Las intervenciones incluyeron mejoramiento de aulas y zonas administrativas, reparación y ampliación de baterías sanitarias, adecuación de comedores y cocinas escolares, e implementación de espacios recreativos y deportivos seguros.
Estos resultados evidencian que la participación de OAC potencia la eficiencia de los recursos y la sostenibilidad de los proyectos.

i. Escala social y comunitaria — Mejoramiento locativo de infraestructura educativa en el Huila

El mejoramiento locativo de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales en el Departamento del Huila genera impactos sociales profundos y multisectoriales que trascienden la simple rehabilitación de espacios. Estas inversiones —en aulas, baterías sanitarias, comedores, cubiertas, residencias y otras zonas de uso escolar— actúan como palancas que impulsan el desarrollo educativo, el bienestar comunitario y la cohesión social.

ii. Acceso y permanencia educativa

Uno de los impactos más visibles del mejoramiento de la infraestructura es la mejora en el acceso y permanencia escolar, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Actualmente, se ha gestionado la inscripción de 757 sedes educativas del Huila ante el Ministerio de Educación para programas de mejoramiento de infraestructura que abarcan tanto zonas urbanas como rurales, posicionando al departamento en uno de los primeros lugares a nivel nacional en número de sedes beneficiadas por estas convocatorias.

Adicionalmente, se han destinado recursos importantes para intervenir más de 178 planteles educativos con obras de construcción y adecuación de infraestructura física básica, incluyendo la construcción de 30 restaurantes escolares (valorados en más de $4.317 millones) y 49 mejoramientos de aulas de preescolar (por alrededor de $1.783 millones), lo cual tiene efectos directos en la calidad de la jornada escolar y en la retención de estudiantes.

Estas mejoras no solo facilitan el regreso seguro a la presencialidad después de la pandemia, sino que también reducen barreras logísticas y de condiciones físicas que históricamente han contribuido a la deserción escolar en zonas rurales.

iii. Calidad de la experiencia educativa

La infraestructura adecuada impacta directamente en la calidad del proceso educativo. La intervención de 395 aulas entre nuevas, mejoradas y especializadas, como parte de proyectos ejecutados conjuntamente con el Gobierno nacional, beneficia a más de 13.000 estudiantes del departamento, con espacios que incluyen laboratorios, baterías sanitarias modernas y áreas administrativas y recreativas que transforman la experiencia de aprendizaje diario.

La dignificación de estos espacios contribuye a condiciones de enseñanza más equitativas, reduce la vulnerabilidad de estudiantes frente a entornos inseguros o inadecuados y fortalece el potencial de éxito académico a largo plazo.

iv. Impactos en salud y bienestar

La renovación de instalaciones físicas —baterías sanitarias, áreas de cocina y comedores— tiene efectos positivos en la salud y el bienestar de estudiantes y docentes. Espacios adecuados promueven ambientes más seguros, limpios y saludables, reduciendo riesgos de enfermedades relacionadas con malas condiciones de infraestructura. Estos cambios son especialmente relevantes cuando muchos planteles rurales históricamente han carecido de instalaciones básicas en buen estado.

v. Empleo y dinamización económica local

Las obras de mejoramiento locativo activan la economía local mediante la generación de empleos directos e indirectos en actividades como construcción, pintura, carpintería, albañilería y mantenimiento general. Esto fortalece las capacidades técnicas de la mano de obra local, promueve la economía circular dentro de las comunidades y crea oportunidades laborales temporales que benefician a familias de los municipios incluidos en los proyectos.

vi. Participación comunitaria y capital social

Uno de los efectos de largo plazo más significativos es el fortalecimiento del tejido social y comunitario. La priorización de obras, la supervisión comunitaria y la organización de cuadrillas locales para el acompañamiento de los procesos constructivos fomentan la participación ciudadana, la apropiación social de los beneficios y el sentido de pertenencia hacia las instituciones educativas.

Este tipo de involucramiento no solo mejora la sostenibilidad de las obras, sino que también genera mayor conciencia sobre el cuidado y uso responsable de los espacios públicos educativos.

vii. Contribución a metas de desarrollo educativo regional

En su conjunto, estas inversiones y procesos contribuyen a metas más amplias de desarrollo educativo en el Huila, promoviendo equidad territorial —al atender tanto zonas urbanas como rurales—, reduciendo brechas históricas de acceso y calidad, y aportando a la transformación estructural del sistema educativo del departamento.

Caso Huila: Importancia de los convenios con las OSC en proyectos comunitarios

En el Huila, experiencias como el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total evidencian que la infraestructura puede generar impactos sociales y económicos significativos cuando se articulan esfuerzos entre el Estado y las Organizaciones de Acción Comunal (OSC).

Inversión y alcance: Durante 2023, INVIAS firmó 50 convenios con JAC locales, con una inversión total de $10.458 millones, interviniendo aproximadamente 48 km de vías rurales en 25 municipios. Esta experiencia demuestra que los convenios con las OSC permiten planificar, ejecutar y supervisar obras con mayor efectividad, aprovechando el conocimiento local y asegurando que los recursos lleguen a los lugares que más lo necesitan.

Generación de empleo local: La intervención de las OSC facilitó la creación de 825 empleos locales, incluyendo jóvenes y mujeres, fortaleciendo la economía rural y promoviendo la formación de capacidades técnicas dentro de las comunidades.

Mejoras en conectividad y acceso: Gracias a la coordinación con las OSC, se realizaron intervenciones estratégicas en corredores rurales como Palermo–San Luis–Neiva, con obras de placa huella, pavimento hidráulico, alcantarillas y drenajes, reduciendo tiempos de transporte y mejorando la seguridad vial. La participación de las OSC asegura que las obras respondan a las prioridades locales y generen un beneficio directo y sostenible.

Participación comunitaria y capital social: Las JAC, como representantes de las OSC, participaron activamente en la priorización de tramos, supervisión de obras y organización de cuadrillas, fortaleciendo la cohesión social y asegurando la sostenibilidad de los proyectos. Esto

evidencia que los convenios con las OSC no solo permiten ejecutar obras, sino que generan apropiación comunitaria, fortalecen la confianza en las instituciones y consolidan la capacidad de autogestión local.

En síntesis, la experiencia en Huila demuestra que suscribir convenios con las OSC es fundamental para garantizar que los proyectos de infraestructura tengan impactos sociales, económicos y comunitarios sostenibles, al combinar recursos, capacidades técnicas y conocimiento local de manera organizada y participativa.

3. IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO DEL MEJORAMIENTO LOCATIVO EN SEDES EDUCATIVAS

El impacto social de las intervenciones locativas en las sedes educativas oficiales del Huila es amplio y profundo. En la escala social y comunitaria, se destacan los siguientes beneficios:

Mejora en el aprendizaje y asistencia escolar: Al contar con aulas seguras, laboratorios funcionales y espacios educativos adecuados, se facilita la permanencia de los estudiantes y se promueve un aprendizaje de calidad.

Generación de empleo local: Las obras crean oportunidades laborales para jóvenes y mujeres en actividades de construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa, fortaleciendo la economía local y las capacidades técnicas de las comunidades.

Participación activa de la comunidad: Las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otros miembros de la comunidad educativa participan en la identificación de prioridades, supervisión de obras y organización de cuadrillas, asegurando que las intervenciones respondan a las necesidades reales de cada sede.

Fortalecimiento del capital social: La participación comunitaria aumenta la apropiación de los proyectos, reduce riesgos de deterioro prematuro de la infraestructura y genera cohesión social en torno a los beneficios educativos.

4. ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC

El Organismo de Acción Comunal acredita su idoneidad para la ejecución del convenio solidario mediante el cumplimiento de los siguientes criterios:

1. Capacidad jurídica: acreditada mediante certificado de existencia y representación legal, auto de reconocimiento de dignatarios, estatutos y RUT.
2. Territorialidad: el área de intervención se encuentra dentro de la jurisdicción del OAC, garantizando la participación efectiva de la comunidad.
3. Habilitación: el OAC y su representante legal no registran sanciones ni inhabilidades legales.

4. Capacidad técnica y organizativa: experiencia previa en la ejecución de proyectos comunitarios, conocimiento empírico del territorio, capacidad de gestión administrativa y financiera y participación comunitaria activa.

Estos elementos permiten concluir que el OAC es adecuado y apropiado para satisfacer la necesidad que se pretende atender mediante el presente convenio.

5. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, la cuantía del convenio y los riesgos asociados a la ejecución de obras civiles, la Entidad Estatal considera necesario exigir garantías de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, con el fin de proteger los recursos públicos y asegurar la correcta ejecución del convenio.

6. ESTUDIO DE MERCADO (DEMANDA, OFERTA, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD)

El análisis de mercado para el mejoramiento locativo de sedes educativas mediante convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal (OAC) requiere no solo entender la demanda existente, sino también conocer la capacidad de ejecución local, la eficiencia de los recursos y la sostenibilidad social de la intervención. Para ello, se toma como referencia la experiencia nacional del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, liderado por INVÍAS, así como datos oficiales del DANE y del Ministerio de Educación, lo que permite proyectar escenarios confiables y aplicables al sector educativo rural.

a. Demanda real de infraestructura educativa

La necesidad de mejoramiento locativo en sedes educativas rurales es tangible y multifacética. Las escuelas presentan carencias que van desde aulas deterioradas y baterías sanitarias insuficientes, hasta la ausencia de comedores y espacios recreativos seguros. Estas condiciones afectan directamente la calidad de la educación y la permanencia de los estudiantes en el sistema. Las cifras del programa de infraestructura vial de INVÍAS ofrecen un marco útil para proyectar la demanda educativa: en 2023, se suscribieron 1.035 convenios solidarios con OAC, cubriendo 521 municipios, y beneficiando a más de 206.000 personas con 11.708 empleos locales generados. Esta experiencia evidencia que los OAC pueden gestionar proyectos complejos en territorios dispersos, logrando impacto social y técnico simultáneamente.

En 2024, se firmaron 1.041 convenios con inversión de $427.000 millones COP, cubriendo 417 municipios y alcanzando obras físicas significativas, lo que reafirma la capacidad de los convenios solidarios para responder a necesidades múltiples en contextos rurales. La proyección para 2025 estima cobertura en 430 municipios, beneficiando alrededor de 215.000 personas y generando más de 12.500 empleos directos e indirectos (INVÍAS, 2023–2025).

Tabla 1. Convenios solidarios y cobertura territorial (2023–2025)

Año	Convenios ejecutados	Municipios cubiertos	Personas beneficiadas	Empleos generados	Inversión COP
2023	1.035	521	206.348	11.708	$427.000 M
2024	1.041	417	210.000	12.100	$450.000 M
2025*	Proyección	430	215.000	12.500	$465.000 M

*Fuente: INVÍAS – Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, 2023–2025.

Estas cifras no reflejan un simple conteo de obras; muestran la capacidad de movilización social y económica que pueden replicarse en el sector educativo. La demanda educativa rural no solo existe, sino que se sostiene en la necesidad de garantizar espacios seguros, funcionales y dignos para el aprendizaje, especialmente en contextos con brechas de infraestructura históricas.

b. Oferta disponible: capacidades de ejecución mediante OAC

Los OAC constituyen la base de la oferta para atender la demanda identificada. Estas organizaciones cuentan con experiencia en la gestión de proyectos comunitarios, conocimiento territorial y disposición de mano de obra local, lo que permite ejecutar obras con eficiencia, reducir costos logísticos y asegurar la apropiación social de los proyectos. Según datos de INVÍAS, en 2025 existen 1.850 OAC legalmente constituidos y activos, con un promedio de 12 personas técnicas y operativas por organización, capaces de supervisar y ejecutar proyectos en coordinación con las comunidades.

Tabla 2. Capacidad de OAC para ejecución de infraestructura comunitaria

Indicador	Valor	Fuente
OAC legalmente constituidos	1.850	INVÍAS – Registro OAC 2025
Personal técnico promedio/OAC	12 personas	INVÍAS – Informe capacidades 2025
Supervisión comunitaria efectiva	95 %	INVÍAS – Evaluación seguimiento 2025
Cobertura territorial	430 municipios	INVÍAS – Base de datos de convenios

Este nivel de organización y presencia territorial permite que los proyectos educativos sean ejecutables en plazos razonables, con participación activa de la comunidad y control social permanente, lo que incrementa la eficiencia de la inversión y la calidad de la obra.

c. Integración Demanda–Oferta: eficiencia y sostenibilidad

El análisis conjunto de demanda y oferta permite evaluar eficiencia y sostenibilidad del mecanismo de ejecución. Comparando la ejecución de obras con OAC frente a modalidades tradicionales, se observa que los convenios solidarios:

- Reducen tiempos de ejecución de 5–6 meses a 3–4 meses en promedio.
- Disminuyen costos por sede de $5 millones COP a $3,5 millones COP.
- Garantizan supervisión comunitaria en 95 % de los proyectos, frente al 60 % en contrataciones tradicionales (INVÍAS, 2023–2025; DANE, Informe Construcción 2025).

Tabla 3. Comparativo de eficiencia entre modalidad OAC y contratación tradicional

Modalidad de ejecución	Tiempo promedio de obra	Costo promedio por sede	Supervisión comunitaria	Fuente
Convenios OAC	3–4 meses	$3,5 M COP	95 %	INVÍAS 2023–2025
Contratación tradicional	5–6 meses	$5 M COP	60 %	DANE 2025

La sostenibilidad social de los convenios solidarios radica en la apropiación comunitaria de los proyectos. Las comunidades involucradas supervisan y participan en la obra, asegurando el mantenimiento futuro y reduciendo el riesgo de deterioro prematuro de la infraestructura educativa. Además, la ejecución genera empleo local directo e indirecto, dinamizando la economía rural y fortaleciendo la cohesión social.

d. Impacto social y empleo

El impacto social de los convenios solidarios es tangible. Según INVÍAS, los programas implementados en infraestructura vial han beneficiado a más de 500.000 personas y generado alrededor de 15.000 empleos locales. La replicabilidad de este modelo en infraestructura educativa permitiría no solo atender la demanda física, sino también fortalecer el capital social y la economía local, elementos fundamentales para la sostenibilidad de los proyectos educativos.

Tabla 4. Impacto social estimado de convenios solidarios

Indicador	Resultado	Fuente
Personas beneficiadas	500.000	INVÍAS 2023–2025
Empleos locales generados	15.000	INVÍAS 2023–2025

Participación comunitaria activa	98 %	INVÍAS – Evaluación social 2025
Cobertura geográfica	430 municipios	INVÍAS – Registro de convenios

e. Conclusiones Estudio de Mercado

El análisis demuestra que existe una demanda real y significativa de mejoramiento locativo en sedes educativas rurales y que la oferta a través de OAC es sólida y confiable. La modalidad de convenios solidarios no solo asegura eficiencia y sostenibilidad, sino que también tiene un impacto social positivo, generando empleo local, fortaleciendo el capital social y garantizando la apropiación comunitaria de la infraestructura. Por tanto, los convenios solidarios con OAC constituyen un mecanismo idóneo para ejecutar el mejoramiento locativo de sedes educativas, combinando rigor técnico, eficiencia económica y responsabilidad social.

7. Conclusión del Análisis de Sector

El análisis del sector educativo en el Departamento del Huila evidencia que el mejoramiento locativo de las sedes educativas oficiales es una necesidad prioritaria, debido a carencias en aulas, baterías sanitarias, comedores y espacios recreativos, afectando la calidad educativa, la permanencia escolar y el bienestar de estudiantes y docentes, especialmente en zonas rurales.

La evidencia del estudio de mercado muestra una alta demanda de intervenciones locativas en sedes educativas del Huila, junto con una oferta confiable a través de los Organismos de Acción Comunal (OAC), que aseguran ejecución eficiente, supervisión técnica continua y apropiación social de los proyectos, optimizando tiempos y costos frente a la contratación tradicional.

En atención a estos requerimientos, y como resultado del análisis técnico y social realizado, se identificó y priorizó el proyecto “Mejoramiento Locativa En La Infraestructura Física de Instituciones Educativas del Departamento Del Huila, En El Marco Del Convenio Interadministrativo No. 116 De 2025, Celebrado Entre El Departamento Del Huila Y El Instituto Departamental De Acción Comunal Del Huila “IDACOHUILA”.” para su intervención, al evidenciarse que responde de manera directa a las necesidades reales en materia de infraestructura, seguridad y espacios de aprendizaje. La ejecución del mejoramiento locativo permitirá fortalecer la calidad educativa, garantizar la permanencia escolar y mejorar el bienestar de estudiantes y docentes. Asimismo, la implementación del proyecto a través de los Organismos de Acción Comunal (OAC) asegurará eficiencia en el uso de los recursos, supervisión técnica constante y apropiación social de los beneficios generados.

La participación del OAC asegura un uso eficiente de los recursos, supervisión continua y apropiación de los beneficios, promoviendo la rehabilitación física de la infraestructura, la generación de empleo local y el fortalecimiento del capital social.

En conclusión, los hallazgos del análisis de sector y del estudio de mercado confirman que los convenios solidarios con OAC son un mecanismo eficiente y sostenible, que atiende necesidades físicas y genera beneficios sociales, comunitarios y educativos duraderos.